



Ley sobre actividades políticas limita y al mismo tiempo protege a empleados federales



Empleados federales en la marcha denominada "Orgullosos por trabajar por Estados Unidos de América". © AP Images/Mary Altaffer

Durante más de 70 años, una ley estadounidense ha fomentado un funcionariado neutro en el plano político y al mismo tiempo ha protegido los derechos constitucionales de los funcionarios del gobierno.

La Ley Hatch de 1939, que lleva el nombre de su autor, el senador Carl Hatch, se denomina oficialmente: "Ley de prevención de actividades políticas perniciosas". Prohíbe a los empleados del gobierno ocupar la mayoría de los cargos públicos electos, así como participar en campañas políticas, recaudar fondos para candidatos políticos o tener en cuenta la afiliación política a la hora de contratar empleados. Las infracciones de la

ley suponen sanciones que abarcan desde una advertencia por escrito hasta el despido laboral.

Al mismo tiempo, la ley protege a los funcionarios de la extorsión política. Por ejemplo, a un funcionario no se le puede despedir, castigar o discriminar si se niega a trabajar en una campaña política o a contribuir fondos a un partido o candidato político. Además, la Ley Hatch limita el clientelismo político, es decir el reparto de empleos en el gobierno en función de la relación o la influencia que tenga una persona con políticos que ocupan cargos electos.

Un apartado de la ley exime a los altos funcionarios del gobierno nombrados por el presidente de la

prohibición de participar en las actividades políticas. Esto permite que empleados como los asesores del Presidente o secretarios del gabinete sigan participando en las actividades políticas de su partido.

Los recursos judiciales que se han presentado contra la ley sostienen que ésta contraviene el derecho del trabajador a la libre expresión, un derecho consagrado en la Primera Enmienda [de la Constitución]; pero el Tribunal Supremo ha defendido la ley en dos ocasiones. En 1947, en el caso *United Public Workers of America contra Mitchell*, el Tribunal Supremo sopesó los derechos de libre expresión del individuo contra la "necesidad básica de orden" en

Ley sobre actividades políticas limita y al mismo tiempo protege a empleados federales

las operaciones del gobierno y concluyó que lo segundo era más importante que lo primero. En 1973, el Tribunal rechazó un recurso similar en el caso *United States Civil Service Commission contra National Association of Letter Carriers*, y presentó los mismos argumentos.

En 1993, el Congreso aprobó una enmienda a la Ley Hatch que prohíbe a los políticos realizar recomendaciones no solicitadas para un puesto de trabajo en el gobierno federal y que impone restricciones más firmes sobre un grupo selecto de funcionarios que trabajan en los ámbitos del orden público, inteligencia y operaciones de seguridad.

Esta enmienda también amplió las actividades permitidas para la mayoría de los funcionarios del gobierno, quienes pueden, entre otras cosas:

- Presentarse a un cargo público en elecciones no partidistas,
- ayudar con las campañas de inscripción de votantes,
- contribuir fondos a organizaciones políticas y asistir a actos de recaudación de fondos para campañas políticas,
- participar en mítines políticos y reuniones, y
- distribuir folletos de campaña.

No obstante, siguen en pie las prohibiciones de:

- Utilizar el cargo oficial para entrometerse en las elecciones;
- solicitar o disuadir las actividades políticas de cualquiera que tenga que presentarse en su organismo;
- solicitar contribuciones políticas;
- presentarse a un cargo electo en elecciones bipartidistas,
- y participar en actividades políticas mientras se encuentran en servicio activo, en uniforme, en la oficina o en un vehículo del gobierno.

La despolitización del funcionariado

La Ley Hatch surgió en respuesta al supuesto uso de empleados federales para propósitos políticos partidarios durante la administración del presidente Franklin Roosevelt, pero sus raíces se remontan a las reformas del funcionariado de la década de 1880, y quizás a las inquietudes que surgieron poco después de la fundación del país.

En 1801 un decreto ejecutivo del presidente Thomas Jefferson aclaró que los empleados del gobierno no debían “ni influir en los votos de los demás, ni participar en las actividades de las campañas electorales”. A lo largo del



El senador Carl Hatch, derecha, presentó el proyecto de ley en 1939. © Harris & Ewing

siglo XIX, los presidentes utilizaron los decretos ejecutivos para limitar distintas actividades políticas de los empleados del gobierno.

En ese mismo período, el “sistema de clientelismo”, según el cual se premiaba la lealtad política con puestos de trabajo en el gobierno, se extendió sobremanera, sobre todo en los años posteriores a la Guerra Civil estadounidense. Entre 1865 y 1891, el número de empleados federales se triplicó, de 53.000 a 166.000, y muchos de ellos trabajaban durante un horario reducido a cambio de salarios altos.

En la década de 1880 el senador George Pendleton dijo que “el sistema de clientelismo ha de ser eliminado, o si no éste eliminará a la república”. La Ley Pendleton de 1883 contribuyó en gran medida a limitar el amiguismo.

En 1939 la Ley Hatch combinó las restricciones de la Ley Pendleton junto con las prohibiciones de distintos decretos ejecutivos y estableció un marco general para retirar la influencia política del servicio civil del funcionariado.

La Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos, un organismo independiente, es la que se encarga de hacer cumplir la Ley de reforma del funcionariado, la Ley de protección del denunciante de irregularidades y la Ley Hatch, y también asesora a los empleados del gobierno en lo que respecta a la licitud de determinadas actividades políticas. El organismo emite más de 1.000 opiniones consultivas cada año.